

PALABRAS DE ALICIA BÁRCENA, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN OCASIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Medellín (Colombia), 30 de marzo de 2009

Quisiera agradecer al Presidente Luis Alberto Moreno por invitarme a dirigir unas palabras a la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en esta ocasión tan especial. Mi gratitud también a la hermosa ciudad de Medellín, muestra de la pujanza cultural y económica de este gran país, y a la gente de Colombia, por su calidez y hospitalidad. Agradezco especialmente al Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Óscar Iván Zuloaga, y saludo al Vicepresidente Ejecutivo, Daniel Zelikov, al Secretario General, Hugo Beteta, y a mis compatriotas, Santiago Levy y Carlos Jarque.

En el quincuagésimo aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo, quisiera sumar mi voz en el reconocimiento internacional del Banco por su contribución al desarrollo de América Latina y el Caribe.

La CEPAL y el BID han compartido cinco décadas de logros y frustraciones. La CEPAL se dio a conocer con la propuesta de Prebisch de cómo reaccionar frente a un momento histórico marcado por el proteccionismo derivado de la Gran Depresión. Más tarde nos inspiró la urgencia de llenar el “casillero vacío” (crecimiento con equidad) sobre la base de la transformación productiva con equidad y la construcción de un pacto fiscal. Nos unió la importancia de la *creación y reinversión* de instituciones públicas y el desarrollo de mejores esquemas de organización y evaluación de gestión pública para lograr la rendición de cuentas y la transparencia.

Hoy nos une, por un lado, la convicción del tributo que merecen nuestros fundadores, porque sus utopías en parte se hicieron realidad, pero también el compromiso de desafiar los retos de nuestra era y ejercer la responsabilidad de nuestra generación. Pero no hay que equivocarse, esta *no es una época de cambios sino un cambio de época*. De allí la importancia de replantear el desarrollo de otra manera, con amplitud de miras, a paso y medida que se reconstruye el orden económico internacional con una profunda identidad regional, que nos debe inducir a abordar la agenda del desarrollo desde la perspectiva de los países que forman nuestra región. Esto implica repensar seriamente nuestros roles, nuestros encuentros, nuestra cooperación interamericana, para promover el desarrollo y favorecer a la población más pobre y vulnerable.

La actual crisis sorprendió a América Latina y el Caribe en un período histórico de bonanza que no se apreciaba en la región desde hacía cuatro décadas. En efecto, gozamos de un quinquenio (2003-2007) de crecimiento económico que se expandió de un 2,1% en 2003 a un 5,7% en 2007. Fue un impulso que permitió a la región crecer todavía durante 2008, a un 4,6%; la más acelerada expansión registrada en 40 años que hoy llega a su fin. Este lustro también fue extraordinariamente positivo en materia social: en el período transcurrido entre 2002 y 2007 la pobreza disminuyó 10 puntos porcentuales, de

un 44% en 2002 a un 34,1% en 2007; la indigencia a su vez se redujo casi 7 puntos porcentuales, de un 19,4% a un 12,6%. A ello debemos sumar que la tasa de desempleo bajó en promedio de un 11% a un 7,5% entre 2003 y 2008 y los ingresos laborales por ocupado aumentaron en casi todos los países. El gasto público total continuó, aunque moderadamente, su tendencia al aumento como porcentaje del PIB, que se inició a comienzos de la década pasada. Y quizá uno de los hechos más significativos sea que la mayoría de los países redujo la brecha de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre entre 2002 y 2007.

Este era el cuadro general reinante en América Latina y el Caribe cuando la crisis se desató, esta vez lejos de sus fronteras, amenazando seriamente los logros económicos y sociales obtenidos en ambientes democráticos y en el pleno ejercicio por parte de la ciudadanía de sus derechos civiles y políticos.

En 2009 se prevé que la economía sufrirá una marcada desaceleración, ya que los países enfrentan menores volúmenes de comercio, un deterioro de los términos de intercambio, mayores restricciones financieras, una fuerte contracción de las remesas, una brusca disminución de la inversión extranjera directa y una caída de la actividad industrial y del turismo, que repercutirá sobre todo en el Caribe. Por ello nos preocupan los efectos que la crisis tendrá sobre los factores determinantes de la reducción de la pobreza.

En primer lugar, los efectos en la generación y calidad del empleo. En este primer trimestre ya se observa una dificultad para generar empleo productivo y de calidad, y preocupa el desplazamiento hacia la informalidad y la ilegalidad. Sobre la base de información derivada de episodios anteriores de enfriamiento de las economías de la región y los primeros datos empíricos de 2009, para este año cabe esperar un aumento de la tasa de desempleo de 1,0 a 1,3 puntos porcentuales (lo que correspondería a un aumento de entre 2,6 y 3,4 millones del número de desempleados). Sin duda la informalidad aumentará, reflejando la caída del empleo formal-protegido. A estos efectos debemos sumar la eventual disminución de las remesas, sobre todo en países con alto porcentaje de familias dependientes de los ingresos laborales que envían sus miembros residentes en Estados Unidos y España (en especial a los países centroamericanos).

En segundo lugar, los efectos en el gasto social, que dependerán de que los países tengan o no recursos para aplicar políticas contracíclicas. Esto es grave si consideramos que en el quintil más pobre, la mitad del ingreso total corresponde a transferencias. Por otra parte, el gasto social que está mejor blindado es la seguridad social, pero es justamente el componente del gasto social más regresivo en términos distributivos, pues el grueso va a parar a los bolsillos de los quintiles superiores. Una restricción del financiamiento y la cooperación internacional tendría consecuencias catastróficas para los países cuyos programas de alivio de la pobreza dependen en gran medida de tales recursos.

Si bien no es posible contar con estimaciones precisas del impacto de la crisis sobre la pobreza y el empleo en este momento, sí se pueden inferir tendencias a partir de

las crisis que la región ha vivido en los últimos 25 años, en el marco de la alta volatilidad del crecimiento económico.

La lección más importante que debemos tener muy presente es que recuperarse de los niveles de pobreza que una crisis genera lleva mucho más tiempo, prácticamente el doble, que la recuperación del crecimiento económico.

Si analizamos la tendencia a largo plazo en cuanto a evolución del PIB per cápita en la región y el principal ciclo de recesión que la afectó —durante gran parte de los años ochenta—, se aprecia que el PIB per cápita antes de la crisis se recuperó en alrededor de 14 años. En cambio, para bajar a los niveles de pobreza que se registraban al comenzar la crisis, la región se tomó 25 años. Es importante destacar la desigualdad como factor decisivo en los rápidos deterioros y las lentas recuperaciones económicas y sociales. Estimular la demanda agregada sin inclusión social puede ser no solo insuficiente sino hasta riesgoso, porque puede generar mayor inequidad.

Hasta hoy, reina la incertidumbre en cuanto a la profundidad y la duración de esta coyuntura desfavorable mundial. Lo que sí sabemos, en cambio, que hemos aprendido de crisis pasadas —en esta región en particular—, es que se requieren medidas rápidas y audaces a nivel nacional e internacional. De hecho, los gobiernos de la región han dispuesto una amplia gama de medidas, tales como inyectar liquidez a los mercados financieros, aumentar los subsidios, reducir los impuestos y elevar el gasto público, sobre todo en infraestructura. Estas disposiciones se han recogido en el reciente informe publicado por la CEPAL *La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional*. No obstante, si las perspectivas económicas globales continúan empeorando, las autoridades deberán desplegar mayores esfuerzos de política.

Por cierto, la crisis provoca un impacto muy diferente de un país a otro, así como es diferente la disponibilidad de recursos para hacerle frente. Por ende, la capacidad para encarar el deterioro de la situación externa y adoptar políticas contracíclicas varía considerablemente.

Teniendo en cuenta el panorama brevemente reseñado en los párrafos precedentes, resulta evidente que las políticas públicas no solo enfrentan el reto de estabilizar el crecimiento económico con medidas contracíclicas, sino también de idear instrumentos para proteger a la población más vulnerable de estos impactos distributivos negativos.

Se necesitan recursos para financiar estas medidas y salvaguardar los logros sociales conseguidos en los últimos años y con ello evitar un retroceso que puede tener graves repercusiones políticas. Se requiere el apoyo de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo —para nosotros el BID— y por eso es crucial que la comunidad internacional garantice que se dispondrá de los recursos suficientes para proporcionar la liquidez y el financiamiento necesarios a los organismos regionales. Esto permitirá innovar y crear ágiles líneas de financiamiento que se adapten a las necesidades y realidades de los países de la región.

La agitación sin precedentes que reina en los mercados internacionales exige asimismo una gran coordinación de esfuerzos a fin de dar el máximo impulso a las políticas y estrategias que se están aplicando a nivel mundial. Dada la extensión de la agenda que tenemos ante nosotros, es importante que trabajemos juntos para encontrar soluciones comunes a fin de promover un crecimiento mundial equilibrado. La cumbre del Grupo de los Veinte, en que participarán tres países de América Latina y el Caribe –la Argentina, el Brasil y México–, brinda un espacio propicio para alcanzar dicha coordinación. También ofrece la oportunidad de que las economías emergentes y en desarrollo sean más escuchadas y tengan una mayor representación en las instituciones financieras internacionales y de que se reconozca su enorme contribución al crecimiento económico mundial y su destacado papel en la economía internacional.

Estamos en un punto de inflexión de la economía mundial y del sistema financiero vigente, y América Latina y el Caribe debe aprovechar el momento para replantearse el modelo de desarrollo. Al formular las medidas para afrontar los desafíos, habrá que buscar activamente las complementariedades entre crecimiento y equidad, competitividad y cohesión social, y desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. También habrá que reconocer y fortalecer la interconexión existente entre las políticas económicas, sociales y ambientales. Por cierto, estamos conscientes de que estas metas suelen contraponerse y generan múltiples dilemas de política, pero es preciso que encontremos soluciones creativas para resolver los conflictos y alcanzar los objetivos propuestos en el mediano y largo plazo.

En este sentido, la CEPAL está elaborando un análisis sobre la manera en que las medidas de política contracíclica, especialmente las relativas a infraestructura que los países de la región han adoptado, deben contribuir a la sostenibilidad ambiental, sobre todo en lo relativo a la utilización de tecnologías bajas en carbono para disminuir los impactos del cambio climático. La crisis climática será irreversible y, a diferencia de la crisis financiera, no hay paquetes de rescate cuando superemos los niveles de seguridad planetaria más allá de los 3 grados de temperatura.

En definitiva, nuestro objetivo es reunir un catálogo de medidas económicas contracíclicas, con objetivos sociales y ambientalmente seguros, que puedan aportar al desarrollo de la región. Entre las políticas para hacer frente a la crisis son decisivas las políticas pro empleo, de transferencias hacia los grupos pobres y vulnerables (transferencias condicionadas, seguros de desempleo, empleo de emergencia en sectores de infraestructura física y social), y que eviten retrocesos en capital humano (educación y salud).

Debemos entonces plantearnos las preguntas en torno al tipo de pactos sociales y políticos que necesitamos para edificar un Estado eficaz en la regulación y el control de las fuerzas del mercado, impulsor de oportunidades de prosperidad para aquellos que las demandan y protector suficiente para aquellos cuya vulnerabilidad los aleja, momentánea o permanentemente, de las oportunidades de bienestar.

Enfrentar la actual crisis supone inmediatamente una inflexión en la dimensión de política y políticas, tanto interna de los países como internacional.

Para esto es fundamental la calidad de la política y la calidad de la democracia.

La agenda regional debe estar sujeta al escrutinio de la mayoría de sus ciudadanos. Debe implementar procesos de toma de decisiones a partir de una agenda con probidad, donde los distintos intereses se transparenten y el diálogo, la negociación y el consenso constituyan herramientas fundamentales en las decisiones que se tomen. Hay que escapar del debate estéril de más o menos Estado, o el de la supremacía del Estado sobre la del mercado. Se trata de encontrar una agenda que reivindique el papel del Estado en la buena conducción de la política pública y valore el mercado, como el mecanismo más eficiente para asignar recursos e impulsar el crecimiento. Sin embargo, hay que estar consciente de que este no se hace cargo de la desigualdad y la inclusión social. Se trata de construir una agenda pública donde quepa un sector privado pujante y una ciudadanía robusta, dotada de derechos y posibilidades ciertas de ejercerlos.

Por último, permítanme señalar que este no es el momento para el aislamiento y el proteccionismo, sino para el multilateralismo y la responsabilidad; una oportunidad de fortalecer la cooperación internacional con miras a evitar y resolver crisis futuras. Un momento en que hay que tener presentes los principios fundamentales del Consenso de Monterrey y redoblar nuestros esfuerzos por alcanzar a tiempo los Objetivos de Desarrollo del Milenio convenidos internacionalmente.

En este contexto, el liderazgo indiscutible del BID y de su Presidente debe agregarse como uno de los elementos positivos de la difícil coyuntura mundial. La banca multilateral debe desempeñar un papel esencial, cual es servir de contrapeso a la volatilidad del financiamiento internacional. Las crisis brindan siempre oportunidades de reflexionar y, si es necesario, de corregir el rumbo. Nos complace ser socios de los gobiernos, conjuntamente con el BID y otros organismos multilaterales, en estas tareas.

La CEPAL, de alma profundamente latinoamericana y caribeña, está dispuesta a seguir apoyando a los gobiernos de América Latina y el Caribe y a la familia interamericana (la OEA y el BID) en sus intentos por responder a la actual crisis mundial, salvaguardar las conquistas sociales que ha logrado la región y sentar las bases para un crecimiento económico más equitativo y ambientalmente sostenible.

Muchas gracias.